

Mirza, Christian Adel. Capítulo II. Factores inhibidores y estimuladores del desarrollo de los movimientos sociales. Bloqueos y potencialidades. En publicación: Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina: la construcción de nuevas democracias. Christian Adel Mirza

CAPÍTULO II

FACTORES INHIBIDORES Y ESTIMULADORES DEL DESARROLLO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES BLOQUEOS Y POTENCIALIDADES

Programa Regional de Becas CLACSO, Buenos Aires, Argentina. 2006. ISBN: 987-1183-45-3. Disponible en la web: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/mirza/partellcap2.pdf>

Fuente: Red de Bibliotecas Virtuales de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe de la red CLACSO
<http://www.clacso.org.ar/biblioteca>

LOS CLIVAJES del nuevo conflicto social en América Latina sugieren una correspondencia con la rearticulación entre sociedad, Estado y mercado; pero más aún, informan de una realidad socioproductiva (y cultural) que ha ido transformando el panorama de las luchas por el trabajo, los derechos humanos, la distribución de la riqueza, la igualdad de género, la reivindicación de la diversidad cultural y el respeto a la pluriethnicidad, el uso y disposición de los recursos naturales (la tierra, el agua, el petróleo). En los albores del siglo XXI, los movimientos sociales parecen remozados, revigorizados y lanzados a la búsqueda de alternativas al neoliberalismo como expresión contemporánea del capitalismo finisecular. De suyo y a veces no tan sutil o subliminal, la recurrencia a un “socialismo a la latinoamericana” aparece con frecuencia en el discurso político de sus principales voceros. ¿Cuáles son los factores estimulantes para el surgimiento, desarrollo o creciente protagonismo de los movimientos sociales, y cuáles los vectores que frenan o sencillamente inhiben su emergencia, expansión y desarrollo? Ensayamos a partir del análisis precedente unas respuestas más bien provisionarias, pero anudadas en los itinerarios más recientes de los movimientos sociales reseñados y, por tanto, una tesis respecto de la posible generalización de las conclusiones, que considera además el papel de los movimientos sociales en la evolución de la democracia en el subcontinente.

FACTORES ESTIMULANTES

DE CARÁCTER POLÍTICO-INSTITUCIONAL

La pérdida de legitimidad de los partidos políticos como vehículos o depositarios de la confianza de la ciudadanía en tanto representantes de intereses diversos ha contribuido a la emergencia, o crecimiento y mayor protagonismo, de los movimientos sociales, sobre todo los de signo antisistémico. Así, puede observarse que en el período 1996-2003, la confianza en los partidos políticos descendía de un valor promedio (para los siete países considerados) del 22,7 al 12,2% en el año 2003 (ver Cuadro 2 en Anexo I).

En ese mismo período se observa una creciente movilización de tipo confrontacional, de fuerte contenido político aunque mediada por demandas sectoriales o específicas vinculadas a los intereses de los sectores sociales más organizados. La aparición en escena de los piqueteros en Argentina y la expansión de un movimiento sindical más autónomo (CTA), así como la emergencia del asambleísmo barrial, se corresponden con este tramo (1996 a 2001); lo mismo acontece con el movimiento indígena en Ecuador, agrupado sobre todo en torno a la CONAIE, que cuenta con la adhesión y el respaldo de vastos sectores sociales, en tanto que el MST en Brasil adquiere un inusitado dinamismo marcado por la oposición decidida al gobierno de Cardoso. Sin embargo, en Chile, el movimiento mapuche no emerge como actor central, aunque es evidente su mayor visibilidad, y la CUT pierde el protagonismo característico de la segunda mitad de los ochenta. Ensayamos para este caso algunas explicaciones posibles desde la perspectiva del modelo de institucionalización: alto grado de institucionalización, sistema partidario amarrado al consenso entre dos partidos que constituyen la mayoría relativa, solidez de las organizaciones políticas; todo lo cual contrasta de manera llamativa con el descenso del nivel de confianza en los partidos políticos (de aproximadamente 27,3% en 1996 a 13,4% en 2003), acompañado de una baja en la confianza en el Parlamento. En otras palabras, un sistema político apoyado en la partidocracia y fuertemente institucionalizado absorbe y canaliza buena parte del conflicto social, sin amenazar necesariamente la pervivencia simultánea de movimientos sociales relativamente autónomos.

Hemos observado, sin embargo, la enorme influencia de los partidos políticos en la formación de las elites y los dirigentes sociales, en particular en los dos casos señalados en el Informe especialmente realizado por nuestro colaborador sobre Chile: el movimiento obrero y el indígena. Para el caso uruguayo, que comparte con el chileno los perfiles de un sistema altamente institucionalizado, la acción social colectiva se redujo en los años inmediatamente posteriores a la recuperación democrática, para –sobre fines de los años noventa– volver a tonificarse, tanto a partir

del movimiento sindical, del movimiento cooperativo, como de organizaciones sociales formales e informales (estimuladas por el Foro Social Mundial), aunque con niveles confrontacionales comparativamente más bajos que en los países vecinos. También en Paraguay, a fines de los años noventa, se produce una eclosión a partir de sectores juveniles (con irrupción en la escena pública en los acontecimientos que condujeron a González Macchi al poder), del movimiento campesino y en menor medida por efecto del movimiento obrero, bastante fragmentado. Mientras tanto, en Venezuela, como se dijo, los movimientos sociales no lograron converger en acciones colectivas de manera articulada, condicionados y atravesados por la frontera entre chavistas y antichavistas, lo que no implica la inexistencia de actores sociales relativamente autónomos.

De alguna forma, el vacío institucional se expresa asimismo cuando la población percibe una perturbación en la conducción del Estado, una ausencia notoria de liderazgos o una incongruencia flagrante entre las expectativas sociales y los rumbos asumidos por los decisores y responsables directos en el manejo de los aparatos públicos. Los partidos políticos son los señalados como “culpables”, en primer término por aquella ausencia o conducción errática, también acusados de privilegiar sus propios intereses por encima del interés común. Los movimientos sociales encuentran campo propicio y fértil para construir un discurso opositor, para captar rápidamente las adhesiones, desarrollando en muchos casos alternativas sustitutivas ante situaciones signadas por la angustia y la urgencia de soluciones (redes alimentarias y de atención sanitaria, solventadas por la solidaridad de la población y las organizaciones que sostienen el movimiento social, experiencias de producción autogestoria, recuperación de talleres y fábricas, fuerte territorialización de la protesta que une los sentidos de acción desde la base de convivencia y proximidad); mientras que los contenidos de las luchas sociales adquieren una “densidad política” mucho mayor que en décadas anteriores.

Los objetivos y propósitos más inmediatos de los movimientos sociales (subsidios para desocupados, tierras para los campesinos, mantenimiento de fuentes de trabajo, freno a las privatizaciones, entre otros) no ocultan, de otra parte, las finalidades de la movilización con base en contraproyectos de largo aliento, que apuntan a redimensionar la acción propiamente política vinculada al papel del Estado (exigencia de transformaciones radicales), a los partidos políticos (transparencia y sujeción al interés colectivo), a las instituciones parlamentarias (defensa de la soberanía nacional, respeto a los mandatos populares ante los intereses de las clases dominantes, rol más fuerte en la salvaguardia de los derechos humanos y de garantía contra la corrupción), a los poderes ejecutivos (liderazgo democrático, apertura al diálogo). Los movimientos sociales examinados han sabido pues aprovechar las grietas y fracturas que colocaron a los partidos políticos en situación de debilidad institucional, sustituyéndolos sólo parcialmente en sus

funciones de representación. No obstante, las claves de recuperación de la legitimidad social de los partidos políticos podrían estar asociadas a un sensible viraje de contenido ideológico; esto es claro en Argentina, Brasil y Venezuela; en menor grado en Paraguay, Ecuador y Chile.

La correlación entre el debilitamiento del sistema de partidos –institucionalizado¹⁹ o incoativo– y el fortalecimiento de la acción social colectiva (incremento del protagonismo de los movimientos sociales) parece indicar una propensión al traslado de las lealtades ciudadanas fuera del sistema de partidos pero dentro de los márgenes de la estructura democrática, lo que parece indicar además una lealtad básica a la democracia asegurando su mantenimiento más allá de toda convulsión, turbulencia, conmoción social o estado prerrevolucionario, que algunos creyeron observar en diciembre de 2001 en Argentina o en enero de 2000 en Ecuador. Esto sin embargo no conlleva necesariamente la certeza de la estabilidad política, y deja planteados algunos desafíos en el camino de la consolidación democrática, y sobre todo en la reconstrucción de democracias inclusivas, que rompan con los ciclos perversos fundados en la dualidad (excluyente) aún prevalente, que deja a miles de ciudadanos despojados –de hecho– del ejercicio pleno de sus derechos sociales y cívicos, mientras para otros sectores sociales minoritarios se hacen mucho más accesibles aquellos mismos derechos.

Por otra parte, según los promedios de los siete países considerados, la confianza en el Parlamento (una de las instituciones democráticas por excelencia) descendía de un 30,25% de media en 1996 a un 18,6% para el año 2003 (ver Cuadro 1 en Anexo I). Este descenso expresaría una implícita responsabilización de los representantes electos por las crisis sociales y económicas de los últimos años de la década del noventa. Los fracasos y éxitos inevitablemente se depositan en los ámbitos donde la población

19 Es preciso establecer que, de acuerdo con la información disponible y procesada, identificamos dos casos en los cuales el modelo institucionalizado asentado durante décadas se tambaleó a raíz de los fuertes cuestionamientos de la ciudadanía, desembocando en una espiral de deslegitimación, pérdida de confianza en las instituciones democráticas (partidos políticos, Parlamento, Presidencia) e inestabilidad creciente. Tanto Venezuela, a mediados de los noventa, cuando asistió al colapso de su sistema de partidos, como Argentina, que ingresó en una de sus peores crisis institucionales a fines del año 2001, corrieron severos riesgos de quiebre o ruptura del sistema democrático, asumiendo rasgos bien típicos del modelo incoativo. Precisamente, estas circunstancias coyunturales dieron origen a dos rutas, a nuestro juicio cualitativamente diferentes. En Venezuela, el recambio de gobierno –en el marco de las reglas de juego electorales– dispuso unas elites en el poder que abrazaron las “causas populares” y plasmaron en el proyecto bolivariano innumerables reivindicaciones de los estratos más pobres, asumiendo, en buena medida, su representación social; mientras que en Argentina, la desconfianza en el sistema político contribuyó a la emergencia de nuevos movimientos sociales contestatarios y más volcados a desempeñar roles más activos y autónomos, aun cuando el recambio de los elencos de gobierno, encabezados por Néstor Kirchner, removió radicalmente la correlación sociopolítica, absorbiendo y canalizando parcialmente el descontento social.

visualiza que se definen las políticas públicas, esto es, en el Parlamento y la Presidencia²⁰ (Poder Ejecutivo). Además, en este contexto, los movimientos sociales ampliaron notablemente sus capacidades de lucha, protesta y movilización: los parlamentos fueron destinatarios predilectos de las acusaciones de corrupción y connivencia con el capital transnacional (al haber votado las diversas leyes de privatización y desregulación laboral), y de ser ineficaces a la hora de dar respuesta a los problemas sociales más acuciantes; por otra parte, los movimientos sociales en Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se constituyeron con frecuencia en adalides de la defensa del patrimonio nacional, y en la oposición más dura a la oleada de reformas de corte neoliberal. No obstante, si repasamos algunos datos relativos al porcentaje de abstención electoral, registramos altos guarismos relativos, que parecen expresar una vez más la confianza en los mecanismos más elementales y básicos de todo régimen democrático.

En síntesis, el deterioro de la credibilidad y legitimidad de las instituciones democráticas abonó el terreno para que los movimientos sociales crecieran cualitativamente y recabaran apoyo, adhesión o simpatía de gran parte de las poblaciones. Cabe acotar las evoluciones peculiares en Brasil y Venezuela, que aun partiendo de indicadores muy bajos de confianza en el Parlamento, lograron mantenerlos (Venezuela) o incrementarlos de manera significativa (Brasil) en los últimos tres años.

CUADRO 15

CREDIBILIDAD Y LEGITIMIDAD DE LAS INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS PROMEDIO 1996-2003 (EN PORCENTAJE)

Perfil del sistema político	Confianza en el Parlamento	Confianza en los partidos	Participación electoral (últimos 20 años)	Sistema de partidos (NEP)	Confianza en los presidentes o el Ejecutivo	Satisfacción con la democracia
Argentina	20,31	14,62	80,00	2,60	27,90	33,27
Brasil	23,62	16,60	75,00	2,90	31,85	22,55
Chile	38,04	22,92	77,00	2,30	54,25	30,94
Ecuador	14,18	11,05	65,00	5,50	23,48	24,94
Paraguay	25,50	23,80	55,00	2,80	26,00	14,21
Uruguay	39,55	37,00	95,00	3,20	40,52	57,84
Venezuela	27,22	20,10	70,00	3,20	38,78	39,25

Fuente: elaboración propia con datos electorales y de Latinobarómetro (1996-2003).

20 No obstante, resulta interesante destacar que en tres de los siete países considerados persiste un nivel de confianza importante en el presidente (Brasil, Argentina y Chile), que en Venezuela se incrementó levemente en el período 1996-2003, mientras que en Uruguay, Paraguay y Ecuador los niveles bajaron de manera aguda.

EN EL DOMINIO ECONÓMICO

La implementación de políticas de corte neoliberal con efectos regresivos de alto impacto provocó la articulación de plataformas amplias constituidas por movimientos sociales de orígenes diversos. El incremento sensible del desempleo de larga duración y la precarización de las condiciones de trabajo coadyuvaron a la “reconversión” de movimientos sociales sustentados en la reivindicación y el reclamo por trabajo (Argentina, Brasil, Uruguay). Las transformaciones profundas en el patrón de explotación agraria y la introducción de lógicas de mercado mucho más “duras” en las áreas rurales empujaron a la organización del campesinado, a partir de modalidades de lucha cimentadas en la conciencia de la exclusión a que estaba sometido, en la necesidad de sobrevivencia social, y desde la solidaridad y la cooperación. Así surgieron los Sin Tierra en Brasil (MST), que a poco de andar el camino se convirtieron en un movimiento de gran porte y arraigo social; los campesinos del Paraguay, que recientemente se aglutinaron en sendas coordinadoras que esbozan una tendencia a la unificación y convergencia de esfuerzos en sus luchas por tierras y políticas de apoyo y promoción del trabajo rural. Los buhoneros en Venezuela también dan cuenta (aunque muy tímidamente) de un proceso de creciente y lenta maduración como movimiento en construcción, en el marco de una economía altamente informalizada, mientras el movimiento obrero intenta rearticularse en torno a organizaciones “independientes”. Los desocupados en Argentina se organizaron en el Movimiento Piquetero, constituyéndose en un actor social de enorme trascendencia, más allá de sus múltiples y heterogéneas expresiones, que justamente ofrecen un crisol de formaciones de base conjugadas por el reclamo y la exigencia del respeto a sus derechos como trabajadores; también la CTA ha tenido la habilidad de acumular en los dos sentidos: trabajadores sindicalizados y desempleados organizados territorialmente. El movimiento sindical en Uruguay ha desplegado en numerosas ocasiones sus estrategias de resistencia a la implantación del modelo privatizador, configurándose en sostén mayoritario de una plataforma antineoliberal que acopió conquistas significativas a través de marchas y paros, pero sobre todo utilizando con singular éxito instrumentos jurídicos constitucionales como el referéndum. A su vez, FUCVAM ha podido desarrollar con resultados plausibles sus propuestas autogestionarias a nivel territorial.

En Argentina, la experiencia del Frente Nacional contra la Pobreza convocó a decenas de organizaciones populares, actores sociales y políticos, movimientos sociales de variada naturaleza, tras un propósito considerado éticamente irreprochable. En Uruguay, la Concertación por el Crecimiento y el Trabajo resultó un éxito de convocatoria a

miles de trabajadores (desocupados y activos), pequeños productores y empresarios. En Chile, aun con un consenso sobre la base de mutuas concesiones que permitió el despliegue de políticas de marcado tono neoliberal, trabajadores, indígenas, movimientos vecinales y estudiantiles marcaron distancia a principios de la presente década con relación a un modelo que ya presenta fisuras y notorias insuficiencias. En Paraguay, la conformación del Congreso Democrático del Pueblo resulta un mojón extremadamente significativo en la dificultosa tarea de articulación de los movimientos sociales, particularmente el movimiento campesino, junto con organizaciones sindicales, estudiantiles, vecinales, de defensa de los derechos humanos, e indígenas, entre otros. En Venezuela, aun cuando se advierte cierta atomización y debilidad para la coordinación de movimientos y actores sociales, los impactos nocivos de las políticas caracterizadas por los ajustes fiscales sucesivos han repercutido en el sentido de provocar más movilizaciones sectoriales en la última década; sin olvidar la trascendencia del *caracazo* del año 1989, como antecedente y anticipo de la resistencia a la implementación del recetario neoliberal. En Ecuador, la convergencia de la CONAIE, el FUT y otras organizaciones del campo popular en las luchas sociales contribuyó a generar un espacio más o menos formalizado y permanente en torno a la Coordinadora de Movimientos Sociales.

Las condiciones económicas en que se ven sumidas las naciones latinoamericanas nos informan de deudas externas que determinan los límites de la soberanía de los estados nacionales y exigen constricciones en términos de mantener los equilibrios fiscales, afectando desde luego no sólo las posibilidades de cubrir las necesidades básicas presentes, sino también hipotecando buena parte del futuro mediano. Si bien los datos macroeconómicos resultan para muchos países bastante alentadores, al menos en cuanto a la superación de los procesos hiperinflacionarios, la reducción del déficit fiscal, la estabilidad monetaria y cambiaria, la mejora relativa de la balanza de pagos y el incremento de las exportaciones, no hay evidencia empírica en la gran mayoría del subcontinente que confirme una modificación sustantiva de la pauta redistributiva del ingreso. En este contexto cobra validez la vinculación directa entre acción social colectiva y situación económica y financiera, sobre todo en función de las expectativas de mejoramiento de todos los estratos sociales, pero muy particularmente los de clase media y baja.

Hemos afirmado y ejemplificado la correlación entre crisis económica y pauperización, y protesta, organización y movilización social. Subrayamos el aspecto subjetivo de la percepción de cambio en las condiciones materiales; esto es, que la expectativa de mejora que tienen los diferentes sectores sociales obviamente está vinculada a los estándares de confort, disposición de bienes y grado de accesibilidad a servicios y prestaciones que presumiblemente pueden alcanzar en

determinado lapso. Ello supone que, para revertir los procesos de exclusión social, empobrecimiento y deterioro de la calidad de vida de un porcentaje muy importante de las poblaciones, los gobiernos deberían dar señales contundentes que asocien directamente los progresos en materia de crecimiento económico, incremento de la productividad (del capital y del trabajo) y estabilidad macroeconómica con la mejora sensible de los ingresos y la provisión de satisfactores esperados por aquellos sectores sociales. De otro modo, persistirán y se multiplicarán las protestas, movilizaciones y luchas sociales, con el riesgo de ahondar el carácter confrontacional de la acción social colectiva, generando la réplica represiva del Estado, la criminalización de la pobreza y la profundización del carácter dual de muchas de las democracias latinoamericanas.

DE CARÁCTER SOCIOCULTURAL

La aceleración de los procesos de integración y “apertura forzosa” de las economías y la influencia del desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones han facilitado la aproximación de actores y movimientos sociales antes aislados en sus luchas, y ahora mucho más articulados en torno a plataformas más amplias. Asuntos vinculados a la etnicidad, la defensa del patrimonio y las tradiciones ancladas en los orígenes comunitaristas de los pueblos indígenas, el respeto a la diversidad cultural y la irreverencia ante la pretendida homogeneidad de un único tipo de “ciudadano moderno”, fueron los que en buena parte de América Latina se instalaron en el pleito público, más allá de la coyuntura y la moda pasajera. La introducción y el creciente uso de los medios electrónicos, el desarrollo de las telecomunicaciones, la información al día, la expansión de la telefonía y la multiplicación de medios alternativos han facilitado enormemente los contactos, comunicaciones, encuentros e intercambios entre sociedades y comunidades.

La alta tasa de urbanización –tendencia marcada desde varias décadas atrás– ha contribuido al intercambio sociocultural y también, en cierto sentido, al desarrollo del impulso gregario; sin embargo, los últimos veinte años han estado signados por las tendencias a la segregación espacial y la fragmentación territorial. Desde la identificación de cinturones periféricos en los que se concentran los sectores sociales más carenciados y con pobreza extrema, hasta los *countries* o barrios privados, vallados y presuntamente protegidos, las ciudades latinoamericanas han perdido buena parte de su función de integración social y cultural, expulsando residentes de áreas centrales a los barrios periféricos, en concurrencia con los procesos migratorios provenientes de las zonas rurales. En este contexto, los actores sociales se han inclinado a recuperar una convivencia más solidaria, asumiendo funciones que

procuran contrarrestar los efectos de la fragmentación y la desintegración del tejido social. En Argentina, el caso de la CTA ejemplifica en su propia conformación organizativa la inclusión en pie de igualdad de los sindicatos formalmente establecidos y los grupos de piqueteros (desocupados); organizaciones de base territorial o de defensa de los derechos humanos; la realización de actividades de formación y socialización a nivel barrial o vecinal, promoviendo redes horizontales y construyendo identidades a partir de valores, normas y principios a contrapelo de los proyectos culturales dominantes. Los MTD revalorizan los aportes comunitarios y el sujeto individuo actuando en el colectivo; rescatan la familia como ámbito para la contención, donde hay lugar para los afectos y apoyos recíprocos; por otra parte, las vivencias cotidianas en varios testimonios recogidos refieren al papel importante de los jóvenes, de las mujeres, de los niños, de los ancianos, en la consolidación del movimiento social desde sus raíces.

En Chile los mapuches y en Ecuador las diversas comunidades indígenas han reconceptuado desde la movilización social y política las ricas tradiciones e identidades representadas como fórmulas alternativas a los imperativos de una integración que pretende desconocer la diversidad cultural, sea mediante la adopción de políticas represivas o a través de dispositivos de control. En Brasil, los sin tierra han sumado a sus luchas sociales por la reforma agraria, las dimensiones educativas y pedagógicas, las prácticas habituales de producción familiar se combinan y complementan con formas asociativas y cooperativas (producción colectiva, distribución equitativa, consumo equilibrado), las escuelas y centros educativos forman parte integrada de un estilo de vida bien característico en las colonias y tierras reapropiadas y en los campamentos y ocupaciones. En Uruguay, la construcción de viviendas por el sistema de ayuda mutua introduce, ciertamente, novedades, no sólo por su peculiar modalidad en la solución habitacional, sino porque el movimiento cooperativo impulsa nuevas formas de relacionamiento entre socios, entre la cooperativa de base y su entorno territorial, multiplicando experiencias culturales (de carácter solidario y participativo), y realizando aportes interesantes en la dimensiones recreativa, educativa y artística. Recrea una convivencia plural y tolerante, respetuosa de la diversidad y potencialmente democratizadora.

En la dimensión sociocultural, las repercusiones y efectos de un modelo modernizador que coloca el espejo de la cultura occidental liberal frente a una sociedad imposibilitada de extrapolar sus pautas de producción y consumo, deriva en la frustración y pasividad por un lado, y en la rebeldía y generación de alternativas por otro. El *locus* de la cultura por oposición se manifiesta en las microcélulas de la sociedad civil lanzadas al trueque, la iniciativa de una economía solidaria, el comunitarismo, la cooperación, las redes de servicios sociales prestados de

manera colectiva, la autogestión social. Es allí donde los movimientos sociales se sienten capaces de operar con lógicas de intercambio diferentes y antagónicas a la racionalidad mercantilista.

FACTORES INHIBIDORES

EN EL DOMINIO PROPIAMENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL

La omnipresencia del Estado en todas sus formas y modalidades, en el marco de un sistema de partidos institucionalizado, ha producido en cierto sentido, y en determinadas etapas de las naciones consideradas, una retracción o al menos una “invisibilidad” de la acción social colectiva (cooptación, represión). El Estado ha desplegado diversas modalidades de relacionamiento con los movimientos sociales; en algunas circunstancias la impronta ha sido el diálogo y la negociación, pero en otras, la represión y la criminalización de las luchas y las movilizaciones, sobre todo de los últimos años (Argentina, Ecuador, Chile y Brasil). También la cooptación y el desarrollo del “neoclientelismo” han servido de reaseguro para el mantenimiento del poder (Argentina, Paraguay, Chile y Venezuela). Desde luego, no es la propia naturaleza del Estado la que condiciona fuertemente el desarrollo de los movimientos sociales, sino que, “capturado” o bajo el control de las elites políticas, este es orientado a inhibir la participación sociopolítica, a cooptar o decididamente a impedir la libre expresión de las demandas.

En los últimos veinte años hemos asistido a una gama variada de estrategias y tácticas que de alguna manera obstaculizaron o generaron contradicciones significativas en el campo social: prácticas inconfundiblemente represoras a los movimientos sociales en Ecuador, Brasil, Argentina, Paraguay, y en algunas coyunturas particulares también en Chile y Venezuela. Pero, además, debemos reconocer que se les abrieron canales de participación en planes, programas o institutos que, en el marco de la ejecución de políticas sociales, convocaron a actores y movimientos sociales a una cogestión democratizadora. Varios son los ejemplos: en Uruguay, la incorporación (reclamada por cierto desde la central sindical), del movimiento sindical en la Junta Nacional de Empleo (JUNAE²¹); en Brasil, la participación en programas de recalificación laboral; en Chile, la creación de la CONADI para el tratamiento de la cuestión mapuche; en Ecuador, la constitución del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indios con el fin de atender las demandas del movimiento indígena. Naturalmente, no estamos afirmando que detrás de todas estas modalidades hubiera intencionalidad

21 Organismo tripartito que cuenta con representantes de los sindicatos, de las cámaras empresariales y del propio Estado, para regular y diseñar la política de recalificación y reconversión laboral.

de frenar, disminuir o sofocar las reivindicaciones de los movimientos sociales; simplemente advertimos que, por un lado, la decisión de participar en dichos ámbitos no resultó nada sencilla y, por otro, que se trata de instrumentos que pueden ser mal utilizados para “apaciguar” el conflicto, y dar la sensación de cumplir con las demandas sociales.

Pero, si estos ensayos son evaluados positivamente, otros mecanismos, sobre todo en el campo de las políticas sociales compensatorias, podrían constituir un problema para los movimientos sociales. De hecho, un manejo clientelar y asistencialista de los subsidios en la mayoría de los países estudiados y en tiempos no muy lejanos, ha dado lugar a la manipulación y la intervención estatal para generar compromisos y alterar ciertos cursos de acción, distorsionando, desnaturalizando y lesionando las autonomías de movimientos y actores sociales potencialmente contestatarios. Sin embargo, más recientemente, los efectos perversos de ciertas políticas de mitigación de la pobreza han sido hábilmente revertidos y convenientemente utilizados por los movimientos sociales, como parte del stock de recursos para la transacción y la presión sobre el Estado. Claro ejemplo de ello son los Planes Trabajar en Argentina, que forman parte del paquete de políticas sociales de ingreso mínimo.

Por otra parte, en algunos casos, el sistema de partidos ha tenido la capacidad de absorber los impactos de su propio deterioro institucional, frenando, vehiculizando o revirtiendo las fuerzas de negación de la política como espacio legítimo de producción de consenso, decisiones u orientaciones estratégicas (coyunturales o no). De tal suerte, los partidos políticos, reconvertidos o readaptados, despertaron nuevamente la atención de la ciudadanía, la que les confirió la función de representación –vista como “connatural”– de intereses. El depositar nuevamente la confianza en el sistema de partidos no adquiere, sin embargo, una connotación legitimadora *sine die*, sino que es regulada por los propios márgenes de ruptura, autonomía social y suficiencia en el grado de satisfacción de las demandas (por libertad, por condiciones materiales y simbólicas de bienestar, por certezas en el rumbo de la democracia).

EN EL PLANO ECONÓMICO

El deterioro del valor Trabajo, los altos índices de desempleo, los cambios operados en el mercado laboral, la desaparición de muchos ámbitos en los que se tejieron fuertes lazos de solidaridad y mancomunidad, la desafiliación²² masiva de miles de obreros y trabajadores también han

²² Robert Castel señala que la idea de *desafiliación* implica también una disociación con los mecanismos tradicionales de integración social, provocados por la precarización laboral, y prefiere aquel vocablo frente a la denominación genérica de *exclusión social* (Castel, 1997).

influido de manera negativa, sobre todo en el movimiento sindical. La pérdida (desmantelamiento) del tejido industrial junto con la tercerización y precarización laboral dispersaron y fragmentaron las luchas de los trabajadores, en ocasiones enfrentados por demandas que se percibían como contradictorias. El peso de las reivindicaciones de empleados y obreros del sector público se contraponen al descenso en el sector industrial o manufacturero de las organizaciones sindicales de arraigo obrerista. Ello también se reflejó en las ciudades, donde numerosas zonas antes bien caracterizadas por su fisonomía fabril se han convertido en grandes áreas semiabandonadas o vaciadas, cuyas redes de soporte (comerciales, sociales, culturales), vinculadas y ligadas al devenir de la industria, también sufrieron el impacto de su degradación. Para miles de trabajadores, aquellas transformaciones implicaron concomitantemente la desaparición virtual de históricas relaciones de intercambio y organización de clase. Esto se hace evidente en la baja de las tasas de afiliación registradas en casi todos los países de tradición industrial o semiindustrial (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay), en los cuales los movimientos sindicales decayeron en términos de relevancia social y política. No obstante, hemos apuntado que algunos de estos movimientos pudieron recomponerse y reubicarse en las postrimerías del siglo pasado, especialmente cuando se articularon con otras organizaciones sociales, o cuando readecuaron sus estrategias y formas de nucleamiento organizacional.

Asimismo, el desarrollo del cuentapropismo, de la microempresa con frecuencia asumida como única estrategia de autoempleo, y del informalismo, dispersan a los trabajadores en miles de unidades económicas que dificultan la conjunción y articulación de esfuerzos organizados, y la configuración de actores sociales de significación en la arena pública. El caso de los buhoneros en Venezuela ilustra la debilidad inherente de estos movimientos nacientes; las gremiales de pequeños y medianos empresarios y productores alcanzan escasamente a erigirse en actores sociales gravitantes en la confrontación con el capital, el Estado o las grandes corporaciones económicas presentes en el subcontinente latinoamericano.

EN EL PLANO CULTURAL

Los efectos de la implantación del neoliberalismo provocaron, por un lado, el despliegue de estrategias de supervivencia de grandes contingentes de trabajadores urbanos y rurales a través de la implementación de fórmulas de articulación solidaria, así como la resignificación de valores contrahegemónicos en el marco de una cultura dominante. No obstante, también debe advertirse sobre los vectores de freno a la expansión de los movimientos sociales: de una parte, la sensación de despojo, desesperanza y desconcierto de la ciudadanía frente al avasallamiento de identidades y construcciones colectivas acuñadas desde décadas atrás; de otra, la sobrevaloración de la

competitividad individualista, la mercantilización de las relaciones sociales, la extensión de las lógicas sustentadas en el costo-beneficio, la racionalidad del “emprendedor exitoso por sus propios méritos”; la individuación negativa (estigmatización) de los excluidos y carenciados; la carrera por el triunfo personal; la importación de pautas de consumo; la globalización cultural que conlleva en ocasiones la depreciación de valores tradicionales por oposición a una pretendida modernización homogeneizante.

El control de los medios de comunicación también resulta esencial para entender cómo operan los factores culturales y discursivos en la producción de valores, opiniones, creencias, normas, sentimientos y percepciones de la población en contextos democráticos. Con frecuencia hemos observado la manipulación o sencillamente el tratamiento frívolo y superficial del conflicto y la acción social colectiva, lo que perjudica el crecimiento de movimientos sociales en aras de obtener legitimidad social, adhesión y apoyo activo. También en este plano interviene la criminalización de la protesta y la movilización social, como elemento cultural de profundidad, designando el piquete o los cortes de ruta, las marchas hacia lugares públicos, la ocupación de fábricas o tierras como “graves atentados a la propiedad”, como delitos que lesionan los derechos de otros ciudadanos. Estos vectores socioculturales calan hondo en determinadas capas de la población, probablemente cada vez menos, pero no por ello resultan menos perjudiciales a los intereses de movimientos sociales que procuran desvelar el rostro de la impunidad, del maltrato, de la injusticia y la venalidad de actos jurídicamente correctos pero éticamente reprobables, tales como el desalojo de fábricas recuperadas por sus propios trabajadores en Argentina, el asalto armado a campamentos de los Sin Tierra y el asesinato de campesinos en Brasil, el encarcelamiento de mapuches en Chile por haber intentado recuperar tierras comunitarias, la represión brutal de jóvenes piqueteros también en Argentina, entre tantas otras realidades contemporáneas a la eclosión y el despliegue de la acción colectiva de protesta social. Ciertamente, la dimensión cultural se combina e integra a otras dimensiones económicas, sociales y psicológicas, de modo que potencialmente se convierten en obstáculos reales; otras veces las representaciones simbólicas del imaginario colectivo inhiben la comunicación o el fluido diálogo entre culturas, menos distanciadas de lo que aparentan estar unas de otras.

La apelación a la unidad de la nación, la invocación de valores universales que siempre están por encima de las demandas y reivindicaciones sectoriales, el llamamiento al respeto de las cláusulas del contrato democrático y republicano, conectadas indisolublemente a la representación de intereses que las elites políticas explícitamente conjugan en los ámbitos institucionalizados, son todas expresiones que se derraman en la retórica pública para conjurar procesos de protesta confrontacional. Se dice que las libertades están por encima de los intereses específicos y,

por tanto, los gobiernos y los parlamentos electos bajo esas reglas deben siempre dirimir el conflicto cuando los actores sociales no pueden hacerlo a través de arreglos privados, de modo que el discurso apunta directamente a minimizar toda acción colectiva que no transite por dichos carriles. Estas líneas argumentativas, bien utilizadas, resultan convincentes y por ello pensamos que también pueden llegar a operar como factores desestimulantes en culturas políticas altamente institucionalizadas.

Lógicamente, los factores estimulantes e inhibidores de la acción social colectiva se imbrican, se entrecruzan, a veces cambiando de signo: en determinadas circunstancias aquellos vectores que parecen estar favoreciendo la emergencia de movimientos sociales se convierten en retardadores o amortiguadores; en otras ocasiones, los factores que supuestamente operan frenándolos desatan sorpresivamente explosiones sociales incontenibles. Pensemos una vez más en el caso argentino. El sistema de partidos institucionalizado, teóricamente, podía suponer que la acción colectiva se restringiese a demandas y protestas cerradas sobre sí mismas, corporativas o acotadas; esto es, se reclamaría por el salario, por el aumento de pensiones o jubilaciones, por más fuentes de empleo, por mejoras en el acceso a servicios e infraestructura; con picos de algidez, pero contando con actores sociales “disciplinados” en unos casos, o mediados por el sistema de partidos en otros, pero sin consecuencias de envergadura sobre el sistema político legitimado. Sin embargo, la pérdida de confianza en los partidos políticos y en el Parlamento (es decir, a partir de un cambio de signo del vector político institucional) contribuyó, a partir de mediados de los años noventa, al surgimiento del Movimiento Piquetero, retonificando la acción cada vez más fuerte de los movimientos sociales en la arena pública. Asimismo, el factor que marca un punto de inflexión en la historia reciente de aquella nación precisamente deviene del dominio político institucional: el riesgo de quiebre del orden constitucional operó decisivamente en la protesta de fines de diciembre del año 2001 y, por consiguiente, contribuyó a asentar a los actores sociales que habían tomado parte en aquellos episodios.

Obviamente, unos y otros factores intervienen simultáneamente, y son influidos por la propia acción colectiva. Los ensayos de articulación entre actores, el respaldo tácito o explícito de la ciudadanía (trátase del movimiento indígena ecuatoriano, que es apoyado no sólo por los indígenas; o los Sin Tierra, a quienes buena parte de las capas urbanas brasileñas ven con simpatía) permiten apreciar una dialéctica que abre caminos allí donde parecía que los movimientos sociales irían a toparse con un muro, revelando la capacidad de reconvertir algunos de los bloqueos en verdaderos desafíos superados arduamente, pero al fin superados. Los movimientos sociales en América Latina se encuentran tal vez en sus momentos más decisivos, cuando se trata una vez más de resguardar la democracia al mismo tiempo que de transformarla para consolidarla.